

ÍNDICE AI: ASA 31/13/00/s
24 de febrero del 2000

Declaración pública efectuada en Katmandú (Nepal) por Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional

La protección de los derechos humanos es la mejor forma de conseguir la paz. Tal vez lleve tiempo negociar una solución, pero con la voluntad política adecuada es posible poner fin inmediatamente a los abusos contra los derechos humanos.

Nepal tiene todo lo que necesita para evitar una crisis de derechos humanos: una sociedad civil activa y unas sólidas garantías constitucionales e internacionales para los derechos humanos. Ha llegado el momento de que los políticos dejen a un lado sus diferencias cuando se trata de hablar de derechos humanos.

Líderes políticos de todas las tendencias nos han hablado de la necesidad de un «consenso nacional» para resolver la «guerra del pueblo». Pero este consenso no debe lograrse a expensas de los derechos humanos, sino que debe estar basado en el respeto de los compromisos de derechos humanos contraídos por Nepal.

Ahora más que nunca urge actuar. Esta misma semana, mientras visitábamos el país, se ha producido una dramática intensificación del conflicto con el homicidio de 18 policías en Rolpa y 18 presuntos maoístas «en represalia».

El pueblo de Nepal no debe quedarse cruzado de brazos observando sin más como crecen las cifras de muertos, como si se tratara del marcador de una confrontación deportiva. Amnistía Internacional se une a los defensores de los derechos humanos en Nepal en su demanda a las autoridades de que cumplan con su responsabilidad de hacer respetar los derechos humanos fundamentales que garantiza la constitución.

La organización también insta a los dirigentes del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) a que terminen con los abusos y den órdenes estrictas a sus mandos de no atacar a la población civil, tomar rehenes, matar o torturar prisioneros ni reclutar niños entre sus filas.

Hemos tenido el gusto de escuchar algunos compromisos positivos de las autoridades durante nuestra visita.

El primer ministro nos comunicó la inminente creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, complemento a la protección de los derechos humanos en Nepal que debería haberse creado hace mucho tiempo. Mañana por la mañana, el comité especial que designará a los miembros de la Comisión se reunirá y comunicará al rey sus recomendaciones. Los dirigentes de los dos grandes partidos políticos han confirmado su apoyo a la inmediata creación de este organismo.

El primer ministro y los dirigentes de los dos grandes partidos políticos nos aseguraron que el proyecto de ley que amplía las facultades de la policía y los jefes de distrito se modificará para que refleje el consenso nacional y las obligaciones internacionales de derechos humanos de Nepal.

Sin embargo, nos alarmó hasta qué punto las operaciones policiales en el marco de la «guerra del pueblo» no están sujetas al control adecuado. Al parecer NO se realiza ninguna investigación independiente de los presuntos homicidios en «enfrentamientos». No ha habido ni un solo caso en que se haya acusado, y menos aún juzgado, a un policía por excesos cometidos en la lucha contra la insurgencia. Se queman los cadáveres y se pierden las pruebas antes de que comiencen las

investigaciones. Los jefes de distrito, los fiscales y los tribunales de distrito hacen la vista gorda mientras se suceden los informes de homicidios en circunstancias controvertidas.

El ministro del Interior y las autoridades policiales han socavado la autoridad de los tribunales, incumpliendo órdenes de hábeas corpus para poner a disposición judicial a las personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Pública o volviéndolas a detener tras ordenar los tribunales su puesta en libertad. Continúan apareciendo indicios de que los policías mantienen a los detenidos en lugares secretos de detención, como el Centro de Formación de la Policía Armada en la Academia de Policía de Maharajgunj.

Se nos prometió que se investigarían 44 casos de «desapariciones» registradas en los últimos dos años.

El gobierno de Nepal debe buscar ayuda internacional de las Naciones Unidas y otros donantes para resolver las debilidades y deficiencias de su marco legal que permiten que se produzcan violaciones de derechos humanos como las «desapariciones». En concreto, hemos animado a las autoridades a que inviten a visitar el país al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que las ayude a solucionar este alarmante problema.

El problema maoísta no debe eclipsar otras cuestiones de derechos humanos que se plantean desde hace largo tiempo y que tienen su origen en la discriminación y la pobreza, como la violencia contra la mujer y los *dalit*. Estas cuestiones a su vez alimentan el conflicto y ponen de manifiesto la necesidad de una estrategia holística basada en los derechos humanos para resolver la «guerra del pueblo».

Una vez más, Amnistía Internacional condena enérgicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por ambos bandos del conflicto. Instamos a los dirigentes nepalíes a que aprendan de los errores de los países vecinos y no los repitan, y a que garanticen el respeto de los derechos humanos de todos los nepalíes.

Si desean más información, llamen a la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono +44 171 413 5566, o visiten nuestro sitio web en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.